

# EL OCCIDENTE.

DIARIO POLITICO.

Sábado 15 de Febrero de 1858.

AÑO IV.—NUM. 967.

EDICION DE LA MAÑANA.

## ADMINISTRACION.

Los señores suscritores cuyo abono concluye el 15 del presente, se servirán renovarlo a tiempo para no espermentar retraso en el recibo de EL OCCIDENTE.

M. Torrijos

MADRID 15 DE FEBRERO.

El gobierno y administración de las provincias deben fijar muy principalmente la atención del poder, a fin de que sean ejercidos en la forma más conveniente a los intereses de cada localidad y a los generales del país. Sin buenas leyes que precisen, aclaren y regularicen las atribuciones de los delegados del gobierno, encargados mas inmediatamente de la administración provincial, no puede esperarse que los pueblos participen de las ventajas a que les da derecho la permanencia al frente de los negocios públicos, de un gobierno el mas ilustrado, previsor, tolerante y benéfico que quiera suponerse. Porque la acción del poder supremo, por enérgica que sea, no puede extenderse con la misma vigilancia a todos los extremos del territorio; tiene que estar confiada a otras personas, mercedoras sin duda alguna de la confianza del gobierno, pero que no están exentas de las debilidades y pasiones inherentes a la humana naturaleza, y que en momentos dados pueden abusar de su posición, si no tienen marcado en la ley el límite hasta donde se extienden sus facultades.

Por no haber estado bien deslindadas estas, han ocurrido muchas veces conflictos y perturbaciones, de que no siempre ha salido ileso el prestigio de las autoridades. A prevenir estos perniciosos efectos deben, pues, encaminarse las miras de todos los gobiernos, así como a poner en consonancia las leyes administrativas con las necesidades nuevamente creadas y con los adelantos que el transcurso del tiempo va introduciendo en todos los ramos de la administración.

Bajo este punto de vista, merecen nuestros elogios los dos proyectos de ley que insertamos en otro lugar, y que acaban de ser sometidos al examen de las Cortes por el actual ministro de la Gobernación. El primero se refiere a la organización y atribuciones de los consejos provinciales; el segundo al gobierno de las provincias. Ambos han sido concienzudamente meditados y preparados por el gobierno, utilizando los trabajos de una comisión compuesta de personas competentes y entendidas en los diversos ramos administrativos. No constituyen en su conjunto un nuevo sistema de leyes administrativas, sino que su objeto es solo introducir en la legislación vigente las modificaciones aconsejadas por la experiencia como mas necesarias y de mayor ponderabilidad. Si el gobierno ha llenado o no cumplidamente su objeto con la confección de los proyectos de que hacemos mérito, no nos proponemos examinarlos aquí, porque no hemos tenido el ánimo de analizarlos hoy, sino simplemente llamar la atención de nuestros lectores hacia dichos documentos parlamentarios, y rendir el tributo de nuestra imparcialidad al celo y buen deseo que se revelan en el señor Díaz, a quien no ha podido ocultarse, como tan versado en la práctica administrativa, la necesidad e importancia de regularizarla, dándole la saludable impulsión que debe tener para corresponder a las exigencias del servicio público. Muy en breve estos

proyectos, cuyo espíritu en general nos parece bastante aceptable, serán objeto de luminosas discusiones en el seno de las Cámaras; allí se depurarán por medio de la severa crítica, se introducirán en ellos las alteraciones de que puedan ser susceptibles, y no dudamos que, al trasformarse en leyes, merecerán la aprobación del país y llenarán el vacío que se advierte en el régimen administrativo de nuestras provincias.

El proyecto relativo a los consejos provinciales les comprende la organización de estos cuerpos; las cualidades necesarias para ser consejero provincial; su nombramiento y separación; la retribución de estos y los gastos de los consejos; sus atribuciones; manera de proceder en los asuntos gubernativos y contenciosos; y por último, la autorización al gobierno para dictar los reglamentos y resolver las dudas que pueda ofrecer el cumplimiento de la ley, oyendo previamente al Consejo Real.

El proyecto sobre el gobierno de las provincias establece la forma en que deben ser nombrados y separados los gobernadores; sueldo y consideración que deben tener; atribuciones que les competen y modo de ejercitarlas; deberes que necesitan llenar para el buen desempeño de sus funciones; forma en que debe ser exigida la responsabilidad de sus actos, y clase de tribunal que en tal caso ha de juzgarlos.

Tales son, en resumen, los puntos principales que abrazan los dos proyectos de ley presentados al Congreso por el señor ministro de la Gobernación. Los analizaremos detenidamente al hacernos cargo de los trámites que siga la discusión en las Cortes.

F. M. Redondo.

Tan poco importante fue ayer la sesión del Congreso, que solo debimos consagrar a su reseña algunas líneas.

Según la votación nominal del acta, se hallaban presentes al abrirse la sesión, ya cerca de las tres, 156 diputados.

En el banco ministerial se hallaban los señores Díaz y conde de Guendulain.

Entre las comunicaciones de que se dio cuenta en el despacho ordinario, figuraba una del señor Roca de Togores haciendo dimisión del cargo de diputado por el mal estado de su salud.

También se dio cuenta de cinco dictámenes de la comisión de casos de reelección; los dos primeros relativos a los señores don Domingo Moreno y don Ignacio Escobar que quedan sujetos a reelección, y los otros tres a los señores Bermúdez de Castro, Moreno López y Ballesteros que se declaran exceptuados de este requisito.

Estos dictámenes quedaron sobre la mesa para ser discutidos inmediatamente.

La orden del día se limitó a la aprobación, sin debate, de los que declaraban no sujetos a reelección a los señores Giron y Gil Osorio.

En seguida apoyó en pocas palabras el señor Altés una proposición para que se abriese una información parlamentaria sobre los hechos denunciados por el señor Prats con referencia a la administración de D. Manuel Godoy. Esta proposición fue aprobada.

Dióse cuenta luego del dictamen de la comisión de casos de reelección, referente al señor Escobar, declarando a este señor diputado en el caso de ser reelegido, y la sesión se levantó inmediatamente.

No esperamos que la de hoy sea mucho mas importante.

J. Muro.

de verano por otros menos lijeros; la vista de un vestido blanco producía una impresión glacial. La mujer de Gauthier estuvo demasiado preocupada para pensar en la curiosidad extraña de que era objeto su vestido blanco, su ligero chal y su pequeño gorro de muselina.

Escitó la atención sin saberlo; se atrajo cumplimientos sin oírlos, y no tardó en encontrarse en la calle Lavery delante de la puerta-cochera de Meunier.

Adelantose con timidez y preguntó al portero si Meunier estaba en su casa. Cuatro o cinco mujeres reunidas en aquella especie de nicho estaban tan embobadas en una conversación, que Susana tuvo que reiterar la pregunta. La portera le dijo que todas aquellas mujeres esperaban al propietario, que no tardaría en volver, y abriendo la puerta de su saquísima, señaló un banco a Susana para que se sentase, diciendo:

—Haced lo que las demás; sentaos aquí y estaréis mas abrigada que en el patio.

Deslizose la mujer de Gauthier en el círculo y tomó posesión del puesto que se le indicaba.

—¿Sigue pagandoos el señor Meunier cada dos meses? preguntó la portera a una mujer vestida de luto.

—Sí, señora, como si mi pobre difunto existiese. Verdad es que se hirió estando a su servicio, pero cuántos maestros hay que....

—No son solamente los que han trabajado por él lo que le deben bendiciones,—repuso una vieja,—ninguno de mis hijos ha cojido una pellada de yeso por su cuenta, y sin embargo, no he olvidado que la tía Malin ha dado doce hombres para el oficio, y que desde que murió el último no tiene para vivir mas que las limosnas que se le hacían.

Según se iba desarrollando la lista de las buenas acciones, Susana tenía mas esperanza.

—¿Cómo habrá quien quiera mal a este hombre y quien le busque escándalo? ¿Cómo podéis creer que

No es extraño que La Epoca disienta, como dice anoche, al dar cuenta de nuestro artículo editorial de ayer, de las apreciaciones y tendencias políticas que en aquel escrito se advierten.—Lo singular y contradictorio sería que el diario vicarista se hallase conforme con nuestro modo de opinar, no siendo nosotros amigos, ni mucho menos, del sanedrín de la Carrera de San Gerónimo, de los conciliábulos santónicos de ninguna fracción política, ni de la política de cubiletes, amalgamas y de tira y afloja a que nuestro colega se muestra aficionado.

Dice también La Epoca que recordamos los esfuerzos que ciertos hombres y ciertas fracciones han hecho durante el bienio, por salvar la monarquía, y que nos olvidamos de los que la salvaron realmente con su heroico esfuerzo. Como no hemos tratado de escribir en el artículo a que se refiere nuestro colega, la historia de los acontecimientos de los últimos años, no hemos tenido necesidad de recordar los servicios que el año de 56 prestó el general O'Donnell, los cuales elogiamos entonces y reconocemos ahora. Pero La Epoca desconoce sin duda que sin los esfuerzos anteriores de los hombres y de las fracciones a que aludimos, no se hubiera preparado la opinión para facilitar el triunfo que obtuvo esta, ayudada por aquel general. Y lo que sobre todo La Epoca desconoce ó aparenta ignorar, es que todos los peligros que cercaron a la monarquía y todos los conflictos revolucionarios del bienio fueron producidos por esos que realmente se fueron al Campo de Guardias a pronunciarse con la tropa que sedujeron, y desde allí a Vicálvaro para respetar la prerrogativa, imponiendo con las armas en la mano la caída del gabinete que, por la voluntad libre y espontánea de la Reina, se hallaba al frente de los negocios públicos.—Sin el pronunciamiento del año de 54 no hubiera habido revolución ni contra-pronunciamiento el 56.—Vea, pues, La Epoca como no ganaría nada la causa que defiende, si evocáramos los hechos de sus amigos, cuya celebridad no es para envidia.

Para concluir diremos a La Epoca, contestando la última parte de sus comentarios, que, en los puestos políticos de confianza, sea en los departamentos que cita, ó sea en otros, subsisten en muchos hombres de ideas opuestas a las que debía representar el gabinete Isturiz, ya que fue preciso que reemplazara al que presidía el general Armero, cuya línea de conducta mereció la desaprobación del partido moderado; por lo cual el actual ministerio tiene el deber de seguir una política firme y decidida, apoyándose solo en los principios y en los hombres puramente conservadores.—Que obre de otra manera es lo que desea naturalmente La Epoca, y que las influencias del último gabinete sigan pesando sobre nuestra atmósfera política. Si esto sucede, vendrá la Unión liberal por fin, y lo desearíamos si fuésemos pesimistas. Detrás de la Unión liberal está a muy pocos pasos el progresismo y la revolución, pero la revolución radical, cuyo huracán desencadenado impetuosamente, barrerá todas nuestras instituciones y conmoviera todo el edificio de nuestra sociedad.

Dice El Círculo:

El Occidente niega al señor Pidal el título de moderado. Por lo visto las excomuniones continúan en el bando retrógrado, y dentro de poco entre los que se separan espontáneamente de la cofradía y los que son despedidos, va a quedar la orden en cuadro, como sucedía en 1854 que no podía encontrarse un moderado para un remedio.

El Occidente no da cartas de naturaleza en tal

uno de los principales compañeros le ha abandonado después de haberle insultado.

—¿Gauthier?—repuso la viuda.

—Justamente. He aquí como ha sucedido.

—Cuando oyó Susana nombrar a Gauthier, se levantó; no quería oír hablar mal de su marido y quiso salir.

—¿A dónde vais?—dijo la portera.

—A tomar el aire,—dijo Susana.

Al salir continuó la portera.

—¡Jesús! ¡qué sofocada estais, hija mía!

Susana cerró precipitadamente la puerta y salió. Luego que salió al patio y la refrescó el aire se sintió mejor; resolvió esperar allí de miedo de oír hablar mal de su marido.

Llegó a poco un carruaje, entró en el patio y se apeó Meunier. Iba a decir a las personas que estaban en la portería que le siguiesen, cuando la portera le señaló a Susana, quien se adelantó temblando y dijo con voz tímida:

—Soy yo, señor Meunier.

—¡Vos, Susana!

La joven arrojaba una punta de su chal como para distraerse del estrepitoso embarazo en que se hallaba, y añadió:

—Venía... quería hablaros... pero tal vez...

Meunier sorprendido con aquella visita no respondió; Susana interpretaba mal aquel silencio. Volvióse aquel a las personas que le rodeaban y les dijo:

—Esperad un poco; dentro de un momento entrarei.

Hizo entrar a Susana en su habitación, presentándole una silla, y él se sentó a algunos pasos de ella. Meunier había abierto las vidrieras de suerte que por fuera se pudiera ver todo lo que allí pasaba. Al fin dijo Susana en voz baja:

ó cual partido a ningún individuo, ni escluye a nadie de esta ó la otra fracción política. Lo que hace es presentar a los hombres tales como son, sacar a luz sus antecedentes, consultar su historia, examinar la clase de influencia que han ejercido y la parte que les ha cabido en los desaciertos de los gobiernos de que formaron parte, para que el país les conozca y decida en qué categoría deben ser colocados. El señor Pidal puede seguir, si gusta, llamándose moderado; pero esto no impedirá que haya hecho mas daño a nuestro partido que sus enemigos mas encarnizados.

De todos modos, el partido moderado no se resiente en su fuerza moral ni numérica porque se alejan de su seno hombres como el señor Pidal y otros que no queremos nombrar, y que han sido siempre elementos de perturbación y de descrédito para el partido conservador.

Ayer fué recogida nuestra primera edición, como saben nuestros lectores. La causa de este percance fué un suceso de fondo en que de una manera bien gráfica nos hacíamos cargo de otro de La Iberia. A fin de no sufrir un nuevo revés, dejamos de contestar a las breves líneas que nos dedica ayer nuestro colega progresista.—Ya habíamos en tiempo oportuno; pero sepa mientras La Iberia que ni con los ministerios anteriores, ni con el actual, ni con ninguno hemos abdicado ni abdicaremos nuestra independencia ni el derecho que tenemos para censurar ó advertir cuanto creamos que puede ser perjudicial a los intereses de nuestro partido.—El papel de ciegos murguistas no cuadra a nuestro carácter. El Occidente, sin necesitar los consejos de La Iberia, seguirá su marcha con la dignidad que acostumbra.

La Gaceta de ayer confirma de una manera oficial la noticia que dimos en nuestro número del mismo día relativa al nombramiento de D. Mariano Herrero para jefe de la sección de administración en el ministerio de la Gobernación.—Este nombramiento estaba acordado desde que quedó vacante el referido puesto.

En la sección oficial hallarán nuestros lectores los reales decretos que ayer publicó la Gaceta relativos a nombramientos de gobernadores civiles y otros funcionarios dependientes del ministerio de la Gobernación.

En el Consejo de ministros que debió presidir anoche S. M. la Reina, quedaria firmada la autorización para que se presenten a las Cortes los presupuestos de 1858, y para pedir a las mismas que dichos presupuestos empiencen a regir desde luego.

Dicese que S. M. ha ofrecido a su augusta hermana hacerla una visita en Sevilla.

Con motivo del fallecimiento del señor conde de San Antonio, pasa este título a la esposa del señor general Serrano, su hija primogénita.

A consecuencia del último real decreto sobre división administrativa de las islas Canarias, ha sido nombrado subgobernador del primer distrito con 24,000 rs., D. Francisco Belmonte, secretario que era del suprimido gobierno.

El mismo cargo en el segundo distrito ha sido conferido con igual sueldo a D. Francisco García Arboleya, que desempeñaba las funciones de jefe civil.

—¿No trabaja con vos Gauthier?

—No lo habéis sabido hasta hoy? Ya sospechaba yo que no era en vos en quien vuestro marido depositaba su confianza.

—Señor Meunier, yo no os he dicho....

—No, pero os conozco, Susana; no hayáis esperado hasta hoy para venir a buscarme.

—Es muy culpable para con vos!

—Susana, debéis comprender cuanto ha debido costarme.

—Sin embargo, su probidad....

—Es lo único que le queda que perder.

—Veo que me he engañado y que no tengo mas que marcharme.

—Si supierais todo lo que he hecho para arrancar a vuestro marido de su perdición.

Le ha hablado como hablaría a mi hermano, le he dicho.... lo que ningún hombre volverá a oír de mi boca.

—Pero vos le dejáis marchar?

—No debía dar a mis otros obreros el derecho de insoltarme.

—Vos me habéis dicho: Gauthier permanecerá siempre conmigo, no le considero como a los demás obreros.

—El me recordó su condición y la mía.

—Y no hareis nada por él? No le perdonareis un momento de error, cuya culpa mas que suya será de....

—De Leroux, os comprendo. ¡Buena Susana! No acuseis a Gauthier de las penas que os causa!

—Yo no acuso a nadie. No vengo mas que a implorar vuestra protección.

—Susana, no se dirá que Meunier os haya negado una cosa que podíais hacer.

No es cierto, según Las Novedades, que el señor arzobispo de Cuba haya dejado a Madrid con dirección a Burgos.

Lo que parece mas probable, es que el padre Claret salga para Vich, en donde debe consagrar al obispo electo para aquella diócesis.

Se ha concedido la cruz de Carlos III al señor don Angel Juan Alvarez, secretario particular de S. M. la Reina.

Retiramos varios originales que teníamos dispuestos a fin de dar cabida en el presente número a los importantes proyectos de ley, leídos el miércoles por el señor ministro de la Gobernación en la Cámara popular, uno sobre la organización y atribuciones de los consejos provinciales y otro sobre el gobierno de las provincias.

Según La Discusión, se ha hablado mucho estos días de la cercana aparición de un periódico monárquico religioso que cuenta con la protección de elevadísimos personajes de la aristocracia y el clero, entre los cuales descuella el representante de una de las naciones mas católicas del mundo. Aunque el futuro periódico, dice, defenderá la monarquía pura, creemos, sin embargo, que no tiene ninguna afinidad con los órganos que representan en la prensa la monarquía tradicional.

Dice anoche La Epoca:

«Parece que el señor general Córdoba, vicepresidente de la sección de guerra, en el Consejo Real, por causas de salud, ha hecho dimisión de este puesto. Esta sección, mientras ha estado dirigida por el general Córdoba, ha desempeñado trabajos importantes relativos a la organización del ejército, que celebraremos mucho se presenten formulados en proyectos de ley a las Cortes.

—Se han reproducido estos días los trabajos para formar en el Congreso lo que se llama el nuevo centro parlamentario.

«Pero cuál será la fórmula política que tenga la virtud de servir de símbolo a este grupo conservador y constitucional? Hé aquí la dificultad de la cuestión.»

Hablando de la actitud de los senadores vicaristas en la discusión del proyecto de contestación al discurso del trono, dice Las Novedades:

«Ha causado gran extrañeza, y no podía menos de suceder así, el silencio que en la alta cámara han guardado los senadores vicaristas. Dicese que este silencio ha sido una hábil maniobra; pero confesamos ingenuamente, a pesar de las explicaciones dadas sobre la materia por su órgano en la prensa, que no reconocemos ni hallamos habilidad ninguna en su conducta.

Sabido es que la contestación al discurso de la corona es siempre el campo elegido por las oposiciones, sean del género que quieran, para presentar la batalla a la mayoría y al gobierno; que en el miden sus armas, exponen sus principios, desenvuelven sus teorías; que allí las mas veces sucumben; pero dejando en pie, mal que le pese al número, como monumento de su derrota, y como recuerdo para el día en que sean llamados al mando, sus programas de gobierno y sus sistemas de administración.

Y siendo así, ¿por qué el vicarismo, que aspira a ser partido, aun siendo tan escaso el número de sus adeptos, no aprovechó la ocasión con que se le brindaba? ¿Por qué sus hombres, que tan solícitos se muestran en defender su personalidad, cuando esta es atacada, no se lanzaron con igual ánimo, con mayor fe a exponer sus doctrinas, a probar sus ventajas, a demostrar, en una palabra, la bondad, la excelencia de su sistema de gobierno? ¿Acaso se cree político da la preferencia a los hombres sobre las doctrinas?

Si el nombre de unión liberal con que se han engalanado es verdaderamente una enseña, ¿por qué no la

—Será una gran lección para él.

—Podeis decirle que vuelva.

—Decírselo! murmuró Susana pensativa; no sabe el paso que he dado: señor Meunier, si yo me atreviera a pedirlo...

—Exigid lo que gustéis Susana.

—No exijo nada, pero si supiera que ha sido a mi ruego... tal vez... ¿He de consentir yo en que se humille a mi marido.

—¿Queréis que me humille yo?

—Eternamente os estaré reconocida.

—Consiento en ello, Susana; pero lo hago por vos. Esta noche enviare a llamar a Gauthier.

—Sois su salvador, su verdadero amigo.

En este momento, un hombre cubierto de sudor, pálido y trémulo se presentó en el umbral de la puerta: era Gauthier.

Desde la palabra fatal que le había dicho la vecina, Gauthier no había pensado en mas que en esclarecer una duda y en comenzar una venganza. Las caricias de Susana no habían sido para él mas que una irritación amarga, un juego para velar una perfidia, y Meunier por una generosidad calculada quería prepararle a un tráfico infame. Eso pensaba cuando atravesaba las calles y los bulevares.

Al volver la esquina de la calle Lanery, en encontró cuatro mujeres adornadas con coquetería. Estas mujeres eran Clara, Victoria y sus amigas.

El recuerdo de las propias culpas es un aguijón para calmar la cólera de un culpable. Una especie de fatalidad representaba a Gauthier la infidelidad de su mujer. Parecía que le gritaban al oído: ¡el vicio es castigado por el vicio! Tu mujer, olvidando sus principios, te castiga del olvido de tus juramentos.

(Se continuará.)

## FOLLETIN.

### HISTORIA DE UN ALBAÑIL.

MIGUEL MASSON Y RAIMUNDO BRUCKER.

SEGUNDA PARTE.

(Continuación.)

CAPITULO VIII.

EL PRIMER DIFETON.

Los mas culpables son los menos indulgentes. Esa es la regla.

(BEAUMARCHAIS).

Los hombres débiles, injustos y apasionados confunden la fuerza con la violencia.

(BORAPARTE).

Sucedía lo que vamos a referir en una fresca tarde de otoño: el sol, velado por los vapores que se exhalaran de la tierra, despedía algunos pálidos rayos; caían las amarillentas hojas de los árboles, y después de haber formado un remolino se iban a amontonar en un terreno bajo y húmedo. El frío causado por los primeros días lluviosos hacía que la mayor parte de los habitantes de París cambiasen sus lijeros vestidos



levantaron? [Por qué no la apoyaron con sus discursos?]

Hé aquí los nombramientos hechos por las secciones del Congreso en su reunión de ayer:

**Comisión para el proyecto de ley sobre el gobierno de las provincias.**

Primera, Castro; segunda, Giron; tercera, Benavides (don Antonio); cuarta, Rólenas; quinta, Zaragoza; sexta, Posada Herrera; séptima, Collantes.

**Idem para el de organización y atribuciones de los consejos provinciales.**

Sanjurjo (don Manuel); Benavides (don Antonio); Altes, Zaragoza; Posada Herrera; Berzantiana (don Manuel).

**Idem para el de reforma de la legislación hipotecaria.**

Nacario Bravo, Gutiérrez de los Ríos, Cárdenas, Gil Osorio, Balmaseda, C. de San Juan, Trápana.

**Idem para el de bases de arreglo del notariado.**

Alerany, Calderón Collantes, Gómez Figueroa, Colado, Sanjurjo (don Pedro), Barber, Sotera.

Nuestro colega *La España* publica en su número de ayer varios documentos de la mayor importancia que manifiestan el estado actual de las cuestiones pendientes en los gobiernos de España y Méjico. Desde la fecha del último de ellos, que determinó inmediatamente la retirada de Madrid del señor Lafragua, nada ha debido tratarse sobre el fondo de esas cuestiones, por haberse dilatado su examen a causa de los entrecamientos puestos por Méjico para la mediación anglo-francesa.

Los documentos, a que nos referimos, y que copiamos a continuación, están tomados del *memorandum* del señor Lafragua, libro que, aun que impreso en Europa, y en castellano, cuesta muchísimo trabajo adquirirlo en España, siendo muy contadas las personas que poseen algún ejemplar.

**Proyecto formado por el ministro de Méjico, y presentado al Excmo. señor marqués de Pidal, por los señores representantes de Francia en Inglaterra en 20 de junio.**

1.º El gobierno de Méjico continuará haciendo, como lo ha hecho hasta hoy, cuanto esté en su arbitrio para castigar con todo rigor de las leyes y en el menor tiempo posible, a los asesinos de San Vicente.

2.º Si en el juicio que actualmente se sigue, se probare que algunas autoridades tuvieron parte en el crimen referido, o que no lo impidieron, o que lo fomentaron, el gobierno de Méjico indemnizará competentemente al dueño de las haciendas de San Vicente y Chiconcuque. Si en la suma de la indemnización, o en el modo de hacerla efectiva, no se pudiesen poner de acuerdo los gobiernos de Méjico y España, decidirá el punto de diferencia una ración que ambos elijan; y si en este punto no hubiese acuerdo, hará la elección S. M. la Reina de Inglaterra.

3.º Se cumplirá fielmente el tratado de 12 de noviembre de 1853, en el cual se estipuló el abono de la deuda de Méjico.

4.º Para remover las dificultades que han surgido en la ejecución del tratado, y dando el gobierno de S. M. C. una prueba de la más completa justicia, se nombrará una comisión que examine los créditos que en concepto del gobierno de Méjico, han sido indebidamente introducidos en la Convención española.

5.º Dicha comisión se formará de un individuo nombrado por el gobierno de Méjico, dentro de los seis días siguientes a aquel en que fuese ratificado este convenio, y otro electo por el ministro de S. M. C. en Méjico en el mismo término. Ambos nombrarán dentro del tercer día después de su aceptación un tercero en discordia; y si no se conviniere, hará la elección el representante de S. M. el emperador de los franceses en Méjico.

6.º Dentro de treinta días contados desde la aceptación de los árbitros, el gobierno de Méjico presentará a la comisión una lista de los créditos que en su concepto han sido indebidamente introducidos en la convención española, y una exposición documentada que funde la exclusión que se pretende. En los treinta días siguientes, los dueños de los referidos créditos contestarán lo que crean conveniente a su defensor. Los árbitros pronunciarán su fallo definitivo en otros treinta días. El tercero en discordia resolverá los puntos que se sometan a su decisión, en el término de ocho días; contados desde que los árbitros le pidan, su juicio. Las resoluciones así tomadas, se ejecutarán irremisiblemente.

7.º En la comisión, para fallar, examinará solamente si los créditos tienen los requisitos de origen, continuidad y propiedad actual exigidos por la letra y espíritu de los artículos 12 y 13 del tratado de 14 de noviembre de 1851 y 13 del tratado del mismo mes de 1853, teniendo como bases, respecto de los españoles, que fueron mejicanos, el art. 4.º del convenio de 27 de abril de 1847, celebrado por los señores Baranda, ministro de relaciones de Méjico, y Bernádez de Castro representante de S. M. C.

8.º Como tal vez algunos de los bonos expedidos por los créditos que fueron desechados, habrán pasado a tercera persona, el gobierno de Méjico, por respeto a la fe pública no los recibirá forzadamente del fondo español; pero los dueños primitivos quedan obligados a entregar en el término de seis meses en bonos del fondo español, una suma igual a la que recibieron, y a devolver en dinero las cantidades que hayan percibido por créditos.

9.º El gobierno de Méjico podrá demandar civil y criminalmente a los que hayan introducido los créditos desechados, y el gobierno de S. M. C. auxiliará con todo su poder las referidas demandas. Los dos gobiernos castigarán a sus respectivos empleados que fueren conculcados de haber obrado mal en la admisión de los referidos créditos.

10.º Los demás negocios pendientes se arreglarán por convenios particulares.

11.º Este convenio será ratificado por el presidente de la república mejicana, dentro de los quince días siguientes a su presentación.

12.º Las ratificaciones se cangearán en esta corte dentro de cuatro meses contados desde la fecha.

**Proposiciones remitidas por el Excmo. señor marqués de Pidal al ministro de Méjico el 23 de junio.**

Méjico estárá con todo el rigor de las leyes, sino lo hubiere ya verificado, los asesinatos y robos cometidos contra súbditos españoles en la hacienda de San Vicente, distrito de Cuernavaca, en 18 de diciembre último, y pocos días después en la de Chiconcuque,

igualmente que los cometidos en el Mineral de San Dimas, Estado de Durango, en la noche del 13 de setiembre próximo pasado, y en otros puntos de la república mejicana.

Se obliga asimismo a indemnizar a los súbditos españoles a quienes correspondan, los daños y perjuicios que en los casos mencionados se les hayan ocasionado: la suma de la indemnización se fijará de común acuerdo, oyendo a los interesados. Las demás indemnizaciones de igual naturaleza, reclamadas por la España, y especificadas en la nota que se entregó al señor Lafragua, serán objeto de arreglos ulteriores.

Méjico reconoce que la Convención firmada en 12 de noviembre de 1853 debe ser fielmente observada, y se compromete a observarla en todas sus partes, interiniendo por otro acto de igual naturaleza no sea de común acuerdo derogada o alterada.

**Carta del ministro de Méjico al señor Pidal.**

Madrid junio 27 de 1857.

Excmo. señor:

Muy señor mío: Siendo ya absolutamente necesario por la dignidad de mi patria, más que por mi persona, que el gobierno de S. M. C. decida lo que crea conveniente sobre mi recepción oficial, tengo la honra de dirigirme a V. E. para manifestarle: que estoy conforme con la primera de las proposiciones que V. E. se sirvió dirigirme en 23 del corriente, si bien proponeré a V. E. una modificación en los términos.

No estando en mis facultades acceder a la segunda, la he remitido a mi gobierno para su superior resolución.

Respecto de la tercera, ya he tenido la honra de decir a V. E. que no debo tratar de ese negocio sino después de reanudadas las relaciones; por lo no habiendo sido él la causa de la interrupción, tampoco debe ser objeto de previo arreglo, tanto menos cuanto que desde hace un año se está cumpliendo el tratado, sin embargo de no haber sido aprobado por S. M. C. el convenio del señor Alvarez.

Y si en las proposiciones que presentaron a V. E. los señores representantes de Francia e Inglaterra, me encargaron de lo relativo a la Convención, fúo a reserva de proponer a V. E. que ese asunto no fuese definitivamente resuelto sino después de mi recepción oficial.

He dado a V. E. cuantas noticias podía apeler, y sobre el desgraciado acontecimiento de San Vicente, ya sobre las dificultades que han impedido al gobierno de Méjico terminar tan pronto cual quisiera, un proceso en que sin duda tiene más interés que España misma. La he demostrado: que, sean cuales fueren los hechos, no hay en Méjico plan alguno contra los españoles, ni menos pensamiento siquiera en el gobierno de la república, de romper las relaciones de amistad que ligán a dos países, que deben ser positivamente hermanos. Le he ofrecido, como de nuevo le ofrezco, que los culpables serán castigados con todo el rigor de las leyes, y que los españoles residentes en Méjico serán debidamente protegidos por el gobierno de la república.

Espero, por lo mismo, que V. E. se sirva decirme en contestación si será desde luego recibido en mi carácter oficial; porque, en caso contrario, tendré el sentimiento de retirarme inmediatamente del territorio español; también espero que en el caso indicado no se dictará orden alguna de hostilidad contra la república.

Ofrezco a V. E. mi respeto y muy distinguida consideración.

A S. E. el marqués de Pidal, ministro de Estado de S. M. C.

**Proposiciones formuladas por el ministro de Méjico y presentadas por lord Hobart al señor Pidal.**

Madrid 7 de julio de 1857.

1.º El gobierno de Méjico indemnizará los perjuicios ocasionados a españoles en los desgraciados acontecimientos de San Vicente, Chiconcuque y San Dimas, si se prueba debidamente que se halla en alguno de los casos en que según el derecho de gentes los superiores son responsables de la conducta de sus súbditos.

2.º El ministro de Méjico, después de ser recibido oficialmente, dirigirá una nota en que manifestará: que su gobierno está pronto a cumplir el tratado de 1853, y pedirá la revisión de los créditos que se cree han sido indebidamente introducidos en el fondo español.

3.º Los demás negocios se arreglarán por convenios particulares.

**Respuesta del Excmo. señor ministro de Estado a la carta del 27 de junio.**

Madrid 23 de julio de 1857.

Muy señor mío: A su debido tiempo recibí la carta de V. E. del 27 de junio; sobre su contenido hablémosle después V. E. y yo largamente en varias conferencias, y por mi parte hice en ellas presente cuantas observaciones me parecieran oportunas: después ha tomado el asunto un nuevo aspecto, y sobre él también hemos conferenciado, aunque desgraciadamente sin más éxito que al principio. En este estado de cosas, me ha manifestado V. E. el deseo de que conteste por escrito a su ya atrasada carta de 27 del pasado, y voy a complacer a V. E., repitiendo como es indispensable, lo mismo que he dicho a V. E. varias veces de palabra.

Me dice V. E. en aquella comunicación que para la dignidad de su patria es absolutamente necesario que el gobierno español decida lo que crea conveniente sobre su recepción oficial: V. E. sabe que esta recepción dependió desde el principio, y depende en la actualidad de tres condiciones o proposiciones, cuya aceptación previa exija a su vez imperiosamente la dignidad de la España.

Era la primera relativa al castigo de los asesinatos y robos cometidos contra los súbditos de S. M. en diversos puntos del territorio mejicano, y señaladamente de los atroces crímenes de la hacienda de San Vicente, Chiconcuque, y mineral de San Dimas. Este castigo, tantas veces ofrecido, y hasta ahora no verificado, es también necesario a la dignidad de la España, que debe a sus súbditos, donde quiera que se hallen, la protección que la ley de las naciones les concede.

V. E. me dice, que está conforme con esta proposición, aunque propondrá alguna modificación en los términos. Estando conforme en la idea, sobre los términos en que se espese no pueden suscitarse grandes dificultades.

Sobre la segunda proposición, relativa a la indemnización debida a los súbditos españoles, me dice V. E.: que no estando en sus facultades acceder a ella, la ha remitido a su gobierno para su resolución. Yo no puedo pretender que V. E. se acuerda de sus facultades; pero debo si hacer observar, que los obstáculos que esta falta de facultades ha opuesto y puede oponer en

lo sucesivo a la negociación pendiente, no son imputables al gobierno español, cuyos representantes reclamaron desde los primeros momentos, esta indemnización, y la reclamaron del mismo gobierno mejicano.

Respecto de la tercera proposición sobre el cumplimiento de la Convención de 1853, lo esencial es que Méjico reconozca, como no puede menos de reconocer, que los tratados, una vez celebrados, obligan a las naciones contratantes, y que deben ser estrictamente respetados y cumplidos ínterin de común acuerdo no se modifiquen o deroguen; y que hallándose en este caso la referida Convención, debe ser religiosamente observada por la república desde luego, y sin perjuicio de cualquiera reclamación que sobre ella tenga que hacer el gobierno español. Una vez sentado y reconocido este principio incontestable, de cuya inobservancia se ha derivado en gran parte el actual conflicto, V. E. hallará en el gobierno español todas las facilidades que en la forma puedan ser necesarias para no contrariar las instrucciones a que alude, y sobre esto añadiré, que no he podido menos de sorprenderme el que V. E. afirme en su carta que desde hace un año se está cumpliendo el tratado. Las noticias que sobre esto tiene el gobierno español son enteramente opuestas: según ellas, ha caído mucho más de un año que el gobierno mejicano ha dejado de satisfacer a los acreedores españoles, absolutamente todas las cantidades que debía pagarles en cumplimiento de aquel tratado, al mismo tiempo que ha satisfecho los créditos de los acreedores de igual clase de otras naciones.

Por lo demás, V. E. tiene cumplida razón al asegurar que España y Méjico deben mirarse como positivamente hermanos; así lo aconsejan a la vez las relaciones de sangre y parentesco; la comunidad de origen, de habla, de costumbres, de religión y de leyes, y aun más imperiosamente que todo, los mismos y más vitales intereses de los dos pueblos en sus posiciones respectivas. Este sentimiento benévolo es y ha sido siempre uno de los móviles principales de la política del gobierno de S. M. respecto de Méjico; por eso la república no tiene una sola queja que articular contra la España en el desgraciado conflicto que estamos encargados de allanar: por eso la España ha reducido las reparaciones que su dignidad y su decoro exigen a lo absolutamente preciso y necesario. Y por eso en fin, ha atesorado el peligro de sus consideraciones y amistosos sentimientos hacia Méjico hayan podido ser erróneos o falsamente interpretados.

Pero todo eso tiene un límite que no se puede ni se debe traspasar en interés mismo de la paz y de la buena armonía que V. E. y yo estamos encargados de establecer; y este límite se traspasaría, a no dudarlo, si el gobierno español accediese a la recepción oficial de V. E. como ministro plenipotenciario de la república mejicana, antes de que ni V. E. haya aceptado las tres moderadas proposiciones que le he presentado, ni el gobierno de la república, después de tanto tiempo, haya llevado a efecto el castigo de los horribles crímenes cometidos contra españoles indolentes: castigo en que como dice V. E. muy bien, tiene Méjico más interés que España misma.

En este supuesto, V. E. podrá obrar como mejor cumpla a los deberes de su posición, o guardando las respuestas de su gobierno a los puntos sobre que dice V. E. haberle consultado, o retirándose inmediatamente del territorio español, según me anuncia; pero cumpla a mi deber advertirle que en este último caso el gobierno español mirará como rotas las negociaciones pendientes; y obrará en consecuencia con la completa libertad de acción en que lo dejaría colocado esta circunstancia, no séndome posible por lo mismo, prometer a V. E., según solicita, que no se dictará orden alguna de hostilidad contra la república.

Aprovecho esta ocasión para reiterar a V. E. las seguridades de mi distinguida consideración.

El marqués de Pidal.

**El Monte Pío Universal, dice la Correspondencia, fige su progresivo aumento; cada día se justifica más y más la buena aceptación y prestigio de que goza; tanto en España como en Ultramar. Sabemos que su registro de pólizas alcanza el número de 4,629, y el capital impuesto asciende a rs. vn. 25,563,555, teniendo depositado en el Banco de España 9,704,000 rs. Estos fabulosos resultados en un solo año y los días que van de este mes, bastan para hacer formar el juicio más exacto y favorable de una paciencia que nace con tan buenos auspicios. La gran mejora que acaba de establecer, además de sus excelentes condiciones, autorizando a los que ingresen en la Sociedad para pagar el 5 por 100 de administración en 5 años en vez de hacer este crecido desembolso de una vez, beneficiando el 1 por 100 a los socios antiguos, es un gran paso que le ha de proporcionar pronto, aceptación, y sumo crédito. H. convocando a junta general de socios para el día 21 del próximo mes de marzo con arreglo al artículo 77 de sus estatutos.**

**BOLSAS ESTRANJERAS.**

Amberes 5 de febrero. — Diferida, 25 5/8 d. Interior, 37 3/4.

Amsterdam 5 de febrero. — Diferida, 25 3/4. Interior, 42 3/4.

Bruselas 6 de febrero. — Diferida, 0. Interior, 36 3/4 d.

Frankfort 5 de febrero. — Diferida, 25 1/2. Interior, 37 1/4.

Londres 5 de enero. — Conso lidados, 96 a 1/8. Exterior, 42 3/4.

Diferida, 26 a 1/4. Certificados, 5 1/4.

Passiva, 6.

Por toda la sección de sueltos:

F. M. Redondo.

**DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS.**

**Proyecto de ley sobre organización y atribuciones de los consejos provinciales.**

A LAS CORTES, LEYENDO:

Autorizado por S. M. el ministro que suscribe, y de acuerdo con el Consejo de ministros, presenta a las Cortes los adjuntos proyectos de ley para el gobierno de las provincias, y sobre organización y atribuciones de los consejos provinciales.

El conjunto de ambos no constituye en absoluto un nuevo sistema de leyes administrativas: su objeto es sólo introducir en la legislación vigente las modificaciones que la experiencia aconseja como mas necesarias y de mayor perentoriedad. Los demás proyectos de leyes orgánicas que forman en cierto modo el complemento de la Constitución, serán sometidos sucesivamente a la deliberación de las Cortes.

Para prepararlos, ha aprovechado el gobierno los trabajos de una comisión compuesta de personas com-

petentes y entendidas en los diversos ramos de la administración; por lo cual abriga la confianza de que corresponderán a las varias y complejas necesidades del servicio público.

Madrid 10 de febrero de 1858. — Ventura Diaz.

**LEY DE ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES.**

**TITULO I.**

**De la organización de los consejos provinciales.**

Artículo 1.º Habrá en cada provincia un consejo provincial encargado de resolver los negocios contentivos administrativos, y de informar al gobierno sobre los demás asuntos de la administración en los casos que dispongan las leyes y reglamentos, o en que la misma autoridad pida su dictamen.

Art. 2.º El consejo se compondrá del gobernador de la provincia y de tres a cinco consejeros, según la clase de las provincias.

Podrán también asistir al consejo en los negocios gubernativos, el secretario del gobierno de provincia, el administrador de rentas, y los ingenieros de obras públicas, de montes y minas del distrito, cuando el gobernador lo estime conveniente, y la indole especial de los negocios lo requiera.

Art. 3.º Además de los consejeros ordinarios nombrará el gobierno en cada provincia un número igual de consejeros supernumerarios, que reemplazarán a los primeros en casos de ausencia, enfermedad, recusación y separaciones.

Los consejeros supernumerarios podrán asistir a las sesiones, pero sin voz ni voto, excepto cuando entren en ejercicio. En este caso cobrarán la mitad de la gratificación que corresponda al propietario.

Art. 4.º El gobernador de la provincia es el presidente del consejo provincial.

Habrán además un vicepresidente nombrado por el gobierno entre los vocales del consejo.

A falta de presidente y vicepresidente, hará sus veces el consejero mas antiguo por el orden de sus nombramientos; y si fuesen de una misma fecha, el de mas edad.

Art. 5.º Hará de secretario de cada consejo provincial un oficial del gobierno de provincia que designe el gobernador, procurando que sea letrado, y dando cuenta de su nombramiento al ministerio de la Gobernación.

El secretario ejercerá su cargo en los términos que dispongan los reglamentos.

**TITULO II.**

**De las cualidades necesarias para ser consejero provincial y de su nombramiento y separación.**

Art. 6.º Los consejeros provinciales serán nombrados por reales decretos expedidos por el ministerio de la Gobernación, y no podrán ser separados sino en la misma forma, de acuerdo con el Consejo de ministros.

Art. 7.º Para ser consejero provincial de número ó supernumerario es necesario tener treinta años de edad y estar comprendido en alguna de las categorías siguientes:

Primera. Pagar en la provincia, y según la clase de esta, 600, 800 ó 1,000 rs. de contribución territorial.

Segunda. Ser abogado con seis años de estudio abierro, y hallarse entre los que paguen por este concepto una cuota igual ó superior a la que por término medio satisface esta clase por subsidio en el colegio a que corresponde ó satisfacer 400 rs. de contribución directa.

Tercera. Ser licenciado en administración ó haber servido cuatro años en la carrera judicial ó administrativa, y haber tenido en ellas un sueldo que no baje de 12,000 rs.

Cuarta. Haber ejercido cuatro años por lo menos el cargo de consejero provincial.

Art. 8.º La mayoría de los consejeros provinciales de número y supernumerarios serán letrados.

Art. 9.º El cargo de consejero provincial es incompatible con cualquier otro empleo público en activo servicio, o con cualquier otro que implique incompatibilidad.

Los consejeros provinciales no pueden ser nombrados individuos de ayuntamientos, diputados provinciales, ni diputados a Cortes por la provincia en que ejercen su cargo.

Art. 10.º No pueden ser consejeros provinciales: Primeros. Los procesados criminalmente, o por sentencia judicial hayan sufrido penas corporales, aflictivas ó inflamatorias y no hubieren obtenido rehabilitación.

Segundos. Los arrendatarios ó administradores de fincas ó de arbitrios provinciales y municipales y sus fiadores.

Terceros. Los que se hallen bajo la interdicción judicial por incapacidad física ó moral.

Cuartos. Los contratistas de toda especie de servicios y obras públicas, ya sean del Estado ó provinciales y municipales y sus fiadores.

Quintos. Los que estuvieren fallidos ó en suspensión de pago, o con sus bienes intervinidos.

Sextos. Los deudores a fondos del Estado, provinciales ó municipales.

Séptimos. Los recaudadores de las contribuciones generales del Estado.

Octavos. Los ordenados en sacris.

**TITULO III.**

**De las atribuciones de los consejos provinciales.**

Art. 11.º Los consejeros provinciales gozarán de una gratificación de 12,000 rs. en Madrid, 10,000 en las provincias de primera clase, 9,000 en las de segunda, y 8,000 en las restantes. Los servicios que presten en estos cargos les serán de abono para cesantía y jubilación en sus respectivas carreras.

Art. 12.º Las gratificaciones de los consejeros, los sueldos de los demás empleados y cuantos gastos ocasionen estas corporaciones, se satisfarán de los fondos provinciales.

**TITULO IV.**

**De las atribuciones de los consejos provinciales.**

Art. 13.º Los consejeros provinciales tendrán en los diferentes ramos de la administración la participación que las leyes especiales de los mismos, reales órdenes y reglamentos les señalen.

Corresponde a los consejeros provinciales liquidar y liquidar las cuentas de fondos municipales en los casos que, con arreglo a la ley de ayuntamientos, no corresponda hacerlo al gobierno y al tribunal de cuentas del reino.

Art. 14.º Los consejeros provinciales serán siempre consultados:

Primero. Sobre la clasificación de los caminos vecinales, y sobre la necesidad de imponer servidumbres temporales en favor de los mismos.

Segundo. Sobre conceder ó negar la autorización para nuevos riegos y demás obras que los necesiten en el cauce ó margen de los ríos.

Tercero. Sobre conceder ó negar la autorización para encausar a los agentes de la administración dependientes del gobernador de la provincia.

Cuarto. Sobre las providencias que dictaren los gobernadores declarándose incompetentes ó competentes para el conocimiento de un negocio en los casos que señalan los arts. 4.º y 13 del real decreto de 4 de julio de 1847.

Quinto. Sobre las autorizaciones que soliciten los ayuntamientos para adquirir ó enajenar bienes muebles ó inmuebles, redimir censos, levantar empréstitos, y hacer toda especie de transacciones, aceptar donaciones ó legados que se hicieren al común ó a cualquier establecimiento municipal, y entablar ó sostener algún litigio en nombre del común.

Sexto. Sobre la nulidad de las reuniones de los ayuntamientos ó de sus acuerdos.

Séptimo. Sobre la nulidad ó validez de las elecciones provinciales ó municipales, y sobre la capacidad legal para ejercer los cargos de diputado provincial, individuo de ayuntamiento.

Octavo. Sobre la inclusión en el presupuesto municipal de los gastos obligatorios, y sobre la ordenación de gastos incluidos en el mismo, cuando el ayuntamiento ó el alcalde se nieguen a verificarlo.

Noveno. Sobre las cuentas de fondos municipales que deban, con arreglo a la ley de ayuntamientos, remitirse al gobierno para su aprobación y feneamiento en el tribunal de cuentas del reino.

Décimo. Sobre el establecimiento de fábricas industriales ó insalubres, alineación y altura de los edificios, cuando no existan reglamentos que señalen las obligaciones de los particulares en estos ramos de policía urbana.

Undécimo. Sobre la necesidad de ocupar temporalmente las fincas ó de aprovechar los materiales conguos a una obra de utilidad pública, cuando los propietarios no se conformen con el parecer del ingeniero.

Duodécimo. En todos los casos que dispone la ley de minas y en los que las demás leyes ó reglamentos exijan su dictamen.

Art. 15.º Los consejeros provinciales no podrán recusarse bajo ningún concepto de evasuar. Los informes que les pida el gobernador en los casos expresados e el artículo anterior, y en todos los demás que lo entienden convenientes.

Art. 16.º Los consejeros provinciales que entran en opinión en negocios gubernativos, pueden si llegan a hacerse contentivos, variarlos como vocales del tribunal.

Art. 17.º Los consejeros provinciales actuarán sólo en primera instancia como tribunales en los asuntos administrativos, y bajo tal concepto oírán y fallarán cuando pasen a ser contentivos; las cuestiones relativas:

Primera. Al uso y distribución de los bienes aprovechamientos provinciales y comunales.

Segunda. Al repartimiento, y exacción individual de toda especie de cargas nacionales provinciales municipales.

Tercera. Al cumplimiento, inteligencia, resciso y efecto de los contratos y remates celebrados con administración para toda especie de servicios y obras públicas, ya sean del Estado, ó provinciales ó municipales.

Cuarta. Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la ejecución de las obras públicas.

Quinta. A la incoordinación ó insubordinación de las fábricas, talleres, máquinas, u oficinas, y a su renovación otros puntos, cuando exista un reglamento que regule estos ramos de policía municipal.

Sexta. Al deslinde de los términos correspondientes a pueblos y ayuntamientos cuando estas cuestiones procedan de una disposición administrativa.

Séptima. Al deslinde y amojonamiento de los montes que pertenecen al Estado, a los pueblos ó a los establecimientos públicos, reservando las cuestiones sobre la propiedad a los tribunales competentes.

Octava. Al curso, navegación y flete de los ríos, canales, obras hechas en sus cauces y márgenes, y primera distribución de sus aguas para riegos y otros usos.

Novena. A las usurpaciones de los caminos vecinales é indemnización de los daños causados en las obras públicas.

Décima. A la cuota que debe abonar cada pueblo para los caminos vecinales de primer orden en que han sido declarados intereses de utilidad pública.

Undécima. A los daños que causen en los caminos vecinales las empresas de explotación.

Duodécima. A la indemnización de los particulares legos en diezmos, legitimidad de los títulos y liquidación de sus créditos.

Décimotercera. A la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y subastas de bienes nacionales y actos posteriores que de ellos se derivan, hasta que el comprador y adjudicatario sea puesto en posesión de dichos bienes.

Décimocuarta. Al registro general de fincas en los casos y en el término que señala el



Art. 23. Para que se pueda tomar acuerdo de lo no contencioso, deberá estar presente la mayoría de los vocales de número, con el gobernador de la provincia, cuando asista, y haber por lo menos un letrado. En caso de empate, el voto del presidente será decisivo.

Para la decisión final de los negocios contenciosos se requiere precisamente la asistencia de tres consejeros, uno de ellos letrado; y lo mismo para aniquilar las cuentas de fondos municipales, siendo indispensable en este último caso la presencia del gobernador.

## TÍTULO VI.

De la materia de proceder en los asuntos contenciosos.

Art. 24. Cuando el consejo actúe como tribunal, será pública la vista del proceso, y se oirán las defensas de las partes.

Las deliberaciones no serán públicas.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos.

Art. 25. No podrá establecerse ninguna demanda ante los consejos provinciales, sino cuando el gobernador hubiese declarado providencia en el asunto que se ventilase.

Art. 26. Será representante y defensor de la Hacienda el promotor fiscal de Hacienda del juzgado de la capital; y en los demás negocios de la administración nombrará el gobernador persona que le represente y defienda.

Art. 27. Las demandas se presentarán ante el gobernador de la provincia, quien, si estimare que el asunto es contencioso, las pasará dentro de tercero día y con el respectivo expediente al consejo provincial.

Art. 28. Si el gobernador creyere que el negocio que motiva la demanda es de su exclusiva competencia, oirá sobre este punto al consejo; resolverá después lo que estime justo, y comunicará su resolución al demandante.

Art. 29. Las decisiones de los consejos provinciales serán siempre motivadas.

Art. 30. La ejecución de estas decisiones corresponde a los agentes de la administración; pero si hubiere de procederse por remate o venta de bienes, los consejos remitirán su ejecución y la decisión de las cuestiones que sobrevengan a los tribunales ordinarios, fuera de los casos expresados en las leyes y reglamentos para la cobranza de contribuciones.

Art. 31. Los consejos provinciales no podrán reformatar su propia decisión, una vez dada; pero si interpretarla o aclararla a petición de parte, cuando se suscitaren dudas sobre su inteligencia.

Art. 32. De las decisiones de los consejos provinciales se apelará ante el consejo real, y ante el mismo se interpondrán los recursos de la nulidad, que procedan.

Las apelaciones no serán admitibles en litigios cuyo interés, pudiendo sujetarse a una apreciación material, no llegue a 2,000 rs.

Art. 33. Los demás límites para la sustanciación y fallo de los negocios contenciosos, serán objeto de un reglamento especial.

## DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 34. Queda autorizado el gobierno para dictar los reglamentos y resolver las dudas que pueda ofrecer el cumplimiento de esta ley, oyendo previamente al consejo real.

Art. 35. Queda derogada la ley de 2 de abril de 1845 y demás decretos y disposiciones posteriores que se opongan a la presente.

Madrid 10 de febrero de 1858.—Ventura Díaz.

## Proyecto de ley sobre el gobierno de las provincias.

## LEY PARA EL GOBIERNO DE LAS PROVINCIAS.

Artículo 1.º En cada una de las provincias habrá una autoridad civil superior, que se denominará gobernador de la provincia.

Art. 2.º Los gobernadores de provincia serán nombrados y separados en virtud de reales decretos, acordados en Consejo de ministros y referendados por su presidente.

Art. 3.º Los gobernadores de provincia tendrán, mientras otra cosa no se determine en la ley de empleos, el sueldo de 40,000 rs., la gratificación que se les señale por gastos de representación, el tratamiento de señoría, y gozarán de los honores, y usarán el uniforme y distintivo que determinen los reglamentos acordados en Consejo de ministros.

Art. 4.º Los gobernadores de provincia obrarán siempre como delegados del rey, y se entenderán directamente con los respectivos ministerios, en los diferentes ramos de la administración del Estado que de ellos dependan.

Art. 5.º Cuando el gobernador se ausente de la provincia, o se imposibilite para ejercer su cargo, le reemplazará la persona que designe el ministro de la Gobernación. Si el ministro no hubiere usado de esta facultad, desempeñará el gobierno de la provincia en la parte política y administrativa el vicepresidente del consejo provincial y el administrador de Hacienda pública en la parte económica.

Art. 6.º La ausencia del gobernador fuere únicamente de la capital, continuará en el ejercicio de todas sus atribuciones desde el punto en que se encuentre, sin perjuicio de que el secretario del gobierno en la parte política y administrativa, y el administrador de rentas en la económica, despachen y firmen todo lo que sea de mera transacción, y se entiendan directamente con el gobierno siempre que la urgencia y perentoriedad de los asuntos lo reclamen.

Art. 6.º Corresponde al gobernador de la provincia:

Primero. Publicar, circular, ejecutar y hacer que se ejecuten en la provincia de su mando las leyes, decretos, órdenes y disposiciones que al efecto le se comunicen por el gobierno.

Segundo. Mantener bajo su responsabilidad el orden y el sosiego público.

Tercero. Proteger las personas y las propiedades.

Cuarto. Reprimir y castigar gubernativamente todo desacato a la religión, o a la moral o a la decencia pública, y cualquier falta de obediencia y respeto a su autoridad, imponiendo las correcciones para que esta ley le autoriza, y sometiendo a la acción de los tribunales de justicia los excesos merecedores de mayor castigo.

Quinto. Cuidar de todo lo concerniente a la sanidad en la forma que prevengan las leyes y reglamentos, y dictar en casos imprevistos y urgentes de epidemia o enfermedad contagiosa, las providencias que

la necesidad reclame, dando inmediatamente cuenta al gobierno.

Sexto. Proponer al gobierno todo lo que pueda contribuir al adelantamiento y desarrollo intelectual y moral de la provincia, y al fomento de sus intereses materiales.

Séptimo. Vigilar e inspeccionar todos los ramos de la administración en el territorio de su mando y los establecimientos que de ellos dependan.

Octavo. Conceder o negar, oyendo previamente al consejo provincial, la autorización competente para procesar a los empleados y corporaciones dependientes de su autoridad por abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones administrativas, dando, en caso de negativa, cuenta al gobierno para la resolución que convenga. Esta autorización no será necesaria en los casos de exacción ilegal de los impuestos públicos, de cohecho en su cobranza, de falsedad en las listas electorales, y de exacción de multas en mérito.

En todo caso, podrán los tribunales, antes de proceder a solicitar el permiso, practicar aquellas diligencias que sean necesarias para la averiguación del delito, y pedir al empleado o sus superiores las noticias e informes que crean oportunos.

Noveno. Ejercer respecto de la hacienda pública la autoridad y vigilancia que los encarga el real decreto de 28 de diciembre de 1849 y demás disposiciones posteriores.

Décimo. Ejercer igualmente en la administración provincial y municipal la autoridad y atribuciones que les confieren las leyes de diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Undécimo. Y en general hacer y ejecutar todo lo que dispongan las leyes, decretos y órdenes del gobierno en la parte que requieran la intervención de su autoridad.

Art. 7.º Para el buen desempeño de sus funciones deberá el gobernador de provincia:

Primero. Instruir por sí mismo, o por sus delegados, la sumaria información de los delitos cuya averiguación se daba a sus disposiciones o agentes, entregando al tribunal competente los detenidos o presos con las diligencias practicadas en el término de tres días.

Segundo. Publicar los bandos de buen gobierno que crea necesarios para el cumplimiento de las leyes y reglamentos, sin ascenderse en las correcciones de lo que prescribe el artículo 505 del código penal.

Tercero. Aplicar gubernativamente las correcciones pecuniarias determinadas en las leyes o disposiciones de policía y bandos de buen gobierno.

Cuarto. Imponer correccionalmente multas cuyo máximo no exceda de 1,000 rs., y en caso de insubordinación el arresto supletorio, conforme a lo dispuesto en el código penal, art. 504, sin que el término de este arresto pueda nunca pasarse de un mes.

Las providencias de los gobernadores sobre lo que establecen los tres párrafos anteriores son apelables por la vía contenciosa ante los consejos provinciales, según dispone el párrafo décimo sexto del art. 17 de la ley para el régimen de estos cuerpos.

Quinto. Provocar a competencia a los tribunales y juzgados cuando estos usen las atribuciones administrativas.

Sexto. Reclamar de la autoridad militar la fuerza armada que necesite.

Séptimo. Suspender en casos urgentes o cualquiera empleado de los ramos sometidos a su inspección y vigilancia, dando inmediatamente cuenta al ministro respectivo.

Octavo. Suspender, modificar o revocar, según lo exijan las circunstancias, y con tal que no se opongan a ello las leyes o los decretos y órdenes del gobierno, los actos de las autoridades, corporaciones y agentes que dependan de su autoridad.

Noveno. Dar o negar permiso para las funciones públicas que hayan de verificarse en el punto de residencia y presidir estos actos cuando lo estime conveniente.

Décimo. Presidir, cuando lo juzgue oportuno, todas las corporaciones cuya inspección y vigilancia se le encomienda en esta ley.

Undécimo. Suplir en los casos de irracional desorden, el consentimiento paterno que los hijos de familia o menores de edad necesitan para contraer matrimonio. Esta facultad corresponde al gobernador en cuya provincia tengan su vecindad, domicilio o residencia ordinaria el padre, madre o persona cuyo consentimiento se haya de suprir.

Duodécimo. Dictar las disposiciones que estime convenientes dentro del círculo de su autoridad para el cumplimiento de las órdenes superiores o para la buena administración o gobierno de los pueblos.

Art. 8.º Los gobernadores de las provincias podrán modificar o revocar sus providencias y las de sus antecesores, a no ser que hayan sido confirmadas por el ministro respectivo; o sean declaratorias de derechos, o hayan servido de base a la sentencia de algún juzgado o tribunal.

No podrán modificar o revocar por sí mismos las resoluciones que adopten declarando en competencia y concediendo o negando el permiso para encausar a los empleados dependientes de su autoridad.

Art. 9.º Las providencias de los gobernadores sobre materias puramente administrativas, y las en que se escuden de su competencia y atribuciones, pueden ser modificadas o revocadas por el ministro respectivo; pero en el caso de que los gobernadores obren por virtud de delegación expresa en las leyes o reglamentos, o sus providencias sean declaratorias de derechos, solo podrá recurrirse contra ellos ante los consejos provinciales o la autoridad que deba conocer, en apelación de aquellos negocios.

Art. 10. Los gobernadores de provincia bajo su responsabilidad están obligados a obedecer y cumplir las disposiciones y órdenes del gobierno que se les comunicen por el conducto debido, sin que por su obediencia puedan nunca incurrir en responsabilidad de ninguna clase.

Art. 11. Lo prevenido en el artículo anterior se entiende con los empleados o agentes inferiores respecto del gobernador de la provincia.

Art. 12. No podrá formarse causa a ningún gobernador de provincia por sus actos como funcionario público sin autorización previa del rey, expedida por el ministro de la Gobernación, oído el Consejo real.

En estos casos los gobernadores de provincia solo podrán ser juzgados por el tribunal supremo de justicia.

Art. 13. Cuando el tribunal supremo de justicia pidiere autorización para encausar a un gobernador de provincia, y en el caso previsto en el número octavo del art. 6.º de esta ley de que un gobernador niegue la autorización para procesar a algún dependiente de su autoridad, el ministro de la Gobernación pasará el

expediente a informe del Consejo Real, quien habrá de evacuar su consulta en el término de dos meses, remitiendo copia de ella a los ministerios de Gobernación y Justicia. Si el ministro de la Gobernación no dictase resolución alguna dentro del término de veinte días después de recibido el informe del consejo, se entenderá que se ha conformado con su dictamen, y el ministro de Justicia comunicará aquella resolución al tribunal que conozca de la causa.

Art. 14. Queda derogada la ley de 2 de abril de 1845, y todos los decretos y demás disposiciones posteriores que se opongan a la presente.

Madrid 10 de febrero de 1858.—Ventura Díaz.

## PARTE OFICIAL.

## PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra señora (Q. D. G.) y su augusta real familia continúan sin novedad en su importante salud.

## REALES DECRETOS.

De acuerdo con mi Consejo de ministros, vengo en declarar cesante, con el haber que por clasificación le corresponda y sin perjuicio de utilizar oportunamente sus servicios, a D. Joaquín Escario, gobernador de la provincia de Sevilla.

Dado en Palacio a diez de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El presidente del Consejo de ministros, Javier de Isturiz.

De acuerdo con mi Consejo de ministros, vengo en nombrar gobernador de la provincia de Sevilla a don Agustín de Torres Valderrama, electo de la de Córdoba.

Dado en Palacio a diez de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El presidente del Consejo de ministros, Javier de Isturiz.

De acuerdo con mi Consejo de ministros, vengo en nombrar gobernador de la provincia de Córdoba a don Agustín Gómez Lognanzo, cesante de igual cargo en la de Albacete.

Dado en Palacio a diez de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El presidente del Consejo de ministros, Javier de Isturiz.

De acuerdo con mi Consejo de ministros, vengo en admitir a D. Sebastián García Pego la renuncia que ha hecho del cargo de gobernador de la provincia de Cáceres, para que sea nombrado por mi real decreto de 20 de enero u otro, sin perjuicio de utilizar oportunamente sus servicios.

Dado en Palacio a diez de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El presidente del Consejo de ministros, Javier de Isturiz.

De acuerdo con mi Consejo de ministros, vengo en nombrar gobernador de la provincia de Cáceres a don Leonardo Villar, cesante de igual cargo en la de las Baleares.

Dado en Palacio a diez de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El presidente del Consejo de ministros, Javier de Isturiz.

De acuerdo con mi Consejo de ministros, vengo en nombrar subsecretario del ministerio de la Gobernación a D. Juan de la Cruz Osá, jefe de la sección de beneficencia y sanidad en el mismo ministerio.

Dado en Palacio a veintiseis de enero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernación, Ventura Díaz.

Vengo en nombrar jefe de la sección de beneficencia y sanidad en el ministerio de la Gobernación a D. Tomás Rodríguez Rubí, oficial que ha sido del mismo ministerio.

Dado en Palacio a veintiseis de enero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernación, Ventura Díaz.

Vengo en declarar cesante, con el haber que por clasificación le corresponda, a D. Juan Lorenzana, jefe de la sección de administración en el ministerio de la Gobernación, proponiéndome utilizar oportunamente sus servicios.

Dado en Palacio a veintiseis de enero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernación, Ventura Díaz.

Vengo en nombrar jefe de la sección de administración en el ministerio de la Gobernación a D. Mariano Herrera, subdirector que ha sido en dicho ministerio.

Dado en Palacio a diez de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernación, Ventura Díaz.

Vengo en declarar cesante, con el haber que por clasificación le corresponda, a D. Felipe Benicio Díaz, oficial de la clase de primeros del ministerio de la Gobernación, proponiéndome utilizar oportunamente sus servicios.

Dado en Palacio a veintiseis de enero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernación, Ventura Díaz.

Vengo en nombrar oficial de la clase de primeros del ministerio de la Gobernación a D. Miguel Díaz, gobernador electo de la provincia de Burgos.

Dado en Palacio a veintiseis de enero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernación, Ventura Díaz.

Vengo en declarar cesante, con el haber que por clasificación le corresponda, y proponiéndome utilizar oportunamente sus servicios, a D. Estanislao Suárez Inclán, oficial de la clase de primeros del ministerio de la Gobernación.

Dado en Palacio a cuatro de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernación, Ventura Díaz.

Vengo en nombrar en comisión oficial de la clase de primeros del ministerio de la Gobernación a D. Joaquín María de Cezar, subdirector que ha sido en el mismo ministerio.

Dado en Palacio a cuatro de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernación, Ventura Díaz.

## MINISTERIO DE FOMENTO.

## Instrucción pública.—Negociado 1.º

En vista de una instancia de don Dionisia de Atienza, para que se le declare comprendida en los beneficios de la real orden de 23 de julio de 1841, y se le concedan por ello las medidas de supervivencia que le corresponden como hija de D. Mateo de Atienza, ayuntamiento de jardinería mayor en el Botánico de

esta corte, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado acceder a la gracia pretendida, y al propio tiempo declarar que es aplicable a los dependientes de este ministerio la citada real orden.

De la S. M. lo digo a V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de febrero de 1858.—Guendulain.—Señor presidente de la junta de clases parvas.

## CORTES.

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR BRAVO MURILLO.

Extracto oficial de la sesión celebrada el día 12 de febrero de 1858.

Abierta a las dos y media, se leyó el acta de la anterior y fué aprobada en votación nominal por los 137 señores siguientes:

Belda.—Barzanallana (D. José).—Goicoerrola.—(D. Francisco).—Trillo.—Boulogni.—Flores Calderon.—Barón.—Carrías.—Giron.—Marqués de la Encomienda.—Conde de Pallares.—Marqués de Villamediana.—Verdugo.—Miranda.—Quintana.—Babos.—Lasso de la Vega.—Estrella.—Conde del Ponallar.—Altés.—Espinosa.—Teresa.—Bautista Muñoz.—García Maceira.—Marej.—Conde de Almodóvar.—Mazo.—Cárdenas.—Aleranz.—Illas y Vidal.—Dalmáu.—Olcinellas.—Pinzon.—Conde de Ezequiel.—Herreros.—Marqués de los Salados.—Vizconde de Revilla.—Mon.—Maquieira.—Moyano Sanchez.—Irazzo.—Santa Cruz.—Lasala (D. Fermín).—Escudero y Azara.—Ochoa (D. Eugenio).—González Serrano.—Carriquiri.—Mariategui.—Ferreira.—Barreiro.—Casado.—Alvarez.—Suarez Inclán.—Tames Hevia.—Trápita.—Conde de San Juan.—Agüel.—Marqués de San Isidro.—Baron de Alcala.—Barber.—Zayas de la Vega.—Marqués de Fontellas.—Mora.—Díaz Martín.—Conde de Vistalorda.—Sancho.—Goicoerrola (D. Roman).—Ramírez.—Arenillo.—Nigrete.—López Serrano.—Muñoz Andradó.—Gimeno.—Pino.—Echevarría.—Fuentes.—Araquistain.—Ballesteros (D. Rafael).—Laguarda.—Rivas.—Aucioles.—Cardenal.—Dorado.—Aldama.—Campoy.—Vazquez.—Marqués de Villavieja.—Martínez.—Moyano.—Iglesias y Barceños.—Reina.—Sanjurjo (D. Manuel).—Cuenca.—Piñau.—Osorio.—Abarzuza.—Sanchez Mendoza.—Clavé.—Bertran de Lis.—Chico de Guzman.—Marín Barrio.—Bayo.—Valero.—Solís.—Labente.—Sanjurjo (D. Pedro).—González Bravo.—Tenorio.—Nacarino.—Brava.—Orla.—Romero.—Toro.—Mena.—Berrueta.—Elduayra.—Armada.—Cabrero.—Melida.—Vahamonde.—Gutiérrez de la Vega.—Bernardo de Quirós.—Alfaro.—Agell.—Sostres.—Pasada Herrera.—Marquez.—Ferrer y Vidal.—Permanyer.—Echarr.—Balmascia.—Alonso.—Marqués de San Carlos.—Hurtado.—Flores.—Aguirre de Tejada.—Conde de Santa Olalla.—Jover.—Rances.—Conde de Hornachuelos.—Davalillo.—Fuentes de la Plaza.—Señor Presidente.

Se anunció que el señor Villalonga de Togores, reanunciaba el cargo de diputado.

Se concedió la licencia que solicitaba el señor conde de Hornachuelos.

Se anunció que los señores Coronado, Lafuente (don Modesto) y Barzanallana (D. Manuel), no podían asistir a las sesiones por hallarse enfermos.

Se dio cuenta y el Congreso quedó enterado, de los nombramientos hechos por las secciones en su reunión de ayer.

Quedó sobre la mesa el dictamen de la comisión sujeta a elección al señor Moreno (D. Domingo).

Igualmente quedaron sobre la mesa los dictámenes considerando no sujetos a elección los señores Bermúdez de Castro, Moreno López y López Ballesteros.

Se mandó imprimir y repartir el dictamen de la comisión que entiende en el asunto del ferro-carril de Quintanilla de las Torres a Ordo, y se anunció que se señalaría día para su discusión.

## ORDEN DEL DIA.

Sin discusión se aprobaron los dictámenes sujetos a elección a los señores Gil Osorio y Giron.

Quedó sobre la mesa el dictamen de la comisión sujeta a elección al señor Escobar.

Proposición del señor Altés.

Se leyó una proposición del señor Altés para que se abra una información sobre los hechos denunciados por don José Prats respecto de la administración del príncipe de la Paz; nombrándose una comisión permanente que proponga sobre este asunto la conveniente resolución al Congreso.

El Sr. ALTÉS: Años hace que se está agitando en el gobierno un expediente sobre divulgación de bienes al príncipe de la Paz. Sobre este asunto han recaído órdenes contradictorias, por las cuales y por las vicisitudes de los tiempos, no se ha podido dar cima a este negocio. Si es cierto lo que dice el señor Prats, no son menos de 4,000,000,000 los que el príncipe de la Paz deba al tesoro.

Por eso los firmantes de esta proposición, deseamos que se nombre una comisión permanente, que oyendo a los interesados, proponga lo más adecuado para resolver definitivamente este negocio.

Puesta a votación esta proposición, fué tomada en consideración y pasó a las sesiones.

El Sr. PRESIDENTE: Orden del día para mañana: dictámenes de las comisiones de peticiones y de casos de elección. Se levanta la sesión.

Eran las tres y cuarto.

## CORREO ESTRANJERO.

Hemos publicado lo que los periódicos ingleses han dicho acerca del debate que ha habido en la cámara de los lóres de Inglaterra sobre la cuestión de refugiados. El Monitor francés ha publicado una versión distinta de estos discursos, que asegura ser la más completa y exacta. Según esta nueva versión, lord Derby y lord Brougham no se han opuesto en principio a las medidas que se proponían para proteger la vida de los soberanos extranjeros contra los complots formados en Inglaterra por los refugiados; estos dos oradores no han hecho reserva sino en lo relativo a las medidas que atacasen al principio del derecho de asilo. En el mismo sentido se expresó lord Campbell.

La interminable cuestión de los ducados alemanes está en vísperas de entrar en una nueva fase. Sabido es que la Dieta ha retardado un mes su deliberación y su voto sobre las conclusiones del informe presentado por la comisión nombrada para examinar este asunto. Al fijar este plazo la Dieta, ha querido dejar al gobierno dadas tiempo de reflexionar y de determinarse a hacer alguna concesión capaz de facilitar un arreglo amistoso.

El 11 de febrero espira este plazo, y nada anuncia hasta ahora que Dinamarca tenga intención de hacer

proposiciones nuevas. Lejos de esto, las noticias de Berlín dicen que el representante de Dinamarca ha entregado la respuesta de su gobierno a las quejas de Lanemburgo, y que el gabinete danés persiste en no ceder nada de sus pretensiones. A no ser que ocurra un nuevo precedente, se puede prever que espirado el término, las conclusiones de la comisión serán adoptadas pura y simplemente y convertidas en resolución federal. Si esto sucede, la cuestión se hará más apremiante, y puede degenerar en un verdadero conflicto, porque hay motivos para creer que las potencias alemanas están decididas a ejecutar completamente las resoluciones de la Dieta.

El Times publica una carta dirigida por lord Canning, gobernador general de la India, a la corte de los Directores. En esta carta, que es una apología de su administración, lord Canning responde a todos los reproches que han sido dirigidos contra él, principalmente al de haberse mostrado demasiado favorable a los indígenas y de no haber proclamado la ley marcial. Establece que no solo se proclamó esta ley en todas partes del territorio en que pueda aplicarse esta medida con ventaja, sino que el gobernador general adoptó otras medidas más útiles y más eficaces que la ley marcial. Concluye diciendo que el resultado de estas medidas ha sido contener la insurrección de los cipayos. El Times se manifiesta muy satisfecho con las explicaciones dadas por lord Canning.

Hace unos días publicamos un despacho telegráfico en que se daban noticias de un motín de los circasianos en Trebisonda. La Prensa de Oriente da pormenores sobre este suceso. Parece que hacia algún tiempo que un centenar de circasianos que estaban allí con esclavos, mujeres y muchachos, querían ir a Constantinopla; pero el consul de Rusia se había opuesto a su marcha; quería que volvieran a Circasia y les ofrecía pasaporte.

Los circasianos no quisieron someterse a los deseos del consul, y hasta llegaron a amarrarle. Los circasianos intentaron embarcarse en el paquete de la Lloyd, pero no quisieron recibirlos a bordo. Irritados por ello, se armaron y se reunieron en la plaza de Meidan. Desde allí enviaron mensaje sobre mensaje al consul ruso a fin de que les diesen pasaportes para Constantinopla, amenazando quemar el consulado y asesinar al consul si no lo hacía. Toda la población se conmovió y la gente fué a la plaza a ver qué era aquello. Los consules de Francia e Inglaterra y sus empleados todos armados fueron al consulado ruso; también acudieron los soldados rusos, de suerte que se reunieron a más de trescientas personas. Los circasianos, viendo aquello, obraron con prudencia y se retiraron.

En la ciudad de Montoro, provincia de Córdoba, se ha perpetrado un robo de consideración a las siete de la noche del 4 del corriente mes, en casa del conde del Robledo, persona acaudalada, y muy querida de todos por su franqueza y nobles sentimientos. Según nos dicen, entraron en la casa ocho hombres armados, se apoderaron de los alhacibanes, los alarcones, y después de amenazar al conde con quitarle la vida si no les daba el dinero que tuviese, arrancaron de su poder las llaves, le hicieron servir de guía y robaron cuarenta mil duros en monedas de oro. Es sobremanera escandaloso que en una de las capitales de juzgado más importantes de la provincia de Córdoba, casi de día, y empleando largo tiempo, se cometan delitos de tanta magnitud y con tal descaro. Ha empezado la sumaria, pero parece que aun no han sido hallados los criminales. Daremos cuenta a nuestros lectores de las gestiones de las autoridades y del resultado del proceso.

## CRONICA DE PROVINCIAS.

En la ciudad de Montoro, provincia de Córdoba, se ha perpetrado un robo de consideración a las siete de la noche del 4 del corriente mes, en casa del conde del Robledo, persona acaudalada, y muy querida de todos por su franqueza y nobles sentimientos. Según nos dicen, entraron en la casa ocho hombres armados, se apoderaron de los alhacibanes, los alarcones, y después de amenazar al conde con quitarle la vida si no les daba el dinero que tuviese, arrancaron de su poder las llaves, le hicieron servir de guía y robaron cuarenta mil duros en monedas de oro. Es sobremanera escandaloso que en una de las capitales de juzgado más importantes de la provincia de Córdoba, casi de día, y empleando largo tiempo, se cometan delitos de tanta magnitud y con tal descaro. Ha empezado la sumaria, pero parece que aun no han sido hallados los criminales. Daremos cuenta a nuestros lectores de las gestiones de las autoridades y del resultado del proceso.

Don José Pérez, vecino de Valencia

y hombre de unos 56 a 58 años, que hacia ya algunos andaba algo trastornado, se retiraba sin duda del paseo la tarde del 10 en compañía de su criado, cuando al llegar al puente del Turia, se arrojó desde la barandilla al cauce del río sin que aquel se apercebiere, quedando casi cadáver. A las pocas horas falleció en el hospital general a donde había sido trasladado.

Habíase mucho en Málaga de un crimen que se dice cometido por un padre con una hija suya de edad de once años. Según cuentan, hace algún tiempo la familia se encontraba en el hueco de una casa en la calle de los Cuarteles, y donde había sido encontrada, por denuncia hecha por el abuelo de la infeliz, demorada espantosamente como un esqueleto y con parte del cuerpo gangrenado. La desgraciada niña no tenía madre, y su padre, o mejor dicho su verdugo, parece tiene relaciones con otra mujer con quien vive. Los tribunales averiguarán la verdad de los hechos, pues el presunto criminal se halla incommunicado en la cárcel a disposición del señor juez de la Alameda.

CRONICA GENERAL.

Esto es escandaloso. Anoche en los círculos literarios corría muy válido el rumor de que insistentemente la empresa de la Zarzuela en su idea de que se le conceda privilegio por determinado número de años para ser la única que en Madrid pueda presentar esta clase de espectáculos, había elevado una exposición al gobierno, que ha pasado a informe del Consejo real.

Ignoramos si estos rumores serán ciertos en todos sus extremos y mucho nos alegraríamos de que se desmintiesen. Sabemos respetar como se debe los intereses de las empresas y no perdemos de vista lo mucho que la música española debe a la de la zarzuela; pero no creemos que estas sean razones suficientes para que el gobierno conceda un monopolio de la inteligencia, que si



